



Serie Reflexiones sobre la Pandemia en Bolivia No 3

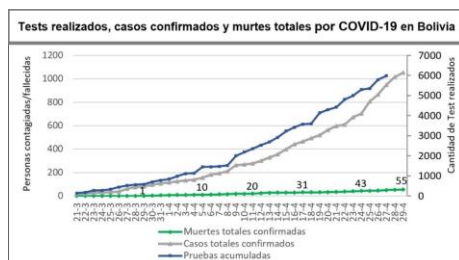
LOS IMPACTOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS DEL COVID-19 EN BOLIVIA

Fernanda Wanderley (IISEC-UCB), Marcela Losantos (IICC-UCB), Carola Tito (IISEC-UCB) y Ana María Arias (IICC –UCB)

El virus COVID-19 se alastró por todo el mundo e hilvanó la experiencia individual y colectiva de un fenómeno universal. De pronto las fronteras geográficas y políticas se borraron y, de forma dramática afrontamos nuestra condición de humanidad que habita una sola casa común: nuestro planeta. Al mismo tiempo, el impacto de la crisis sanitaria global puso al desnudo las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los países y al interior de los mismos.

Como un país de renta media, Bolivia está en el grupo con limitado espacio fiscal para solventar los costos que requieren las medidas necesarias para salvar la vida de sus habitantes. No queda duda que la principal medida global para desacelerar el contagio es el distanciamiento social (cuarentena) mientras no se cuente con una vacuna. Sin embargo, las capacidades financieras para costear el paro de la mayoría de las actividades económicas y mantener la población en sus casas son desiguales entre los países. También Bolivia, como la mayoría de los países latinoamericanos, enfrenta problemas sociales estructurales como la alta informalidad del trabajo, altos niveles de pobreza y desigualdad, y sistemas fragmentados y deficitarios de protección social. A los problemas económicos y sociales se suman la debilidad institucional y la situación política compleja que dificulta la coordinación entre los distintos niveles gubernamentales, partidos políticos, poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y entre el sector público y los actores económicos nacionales. Es importante recordar que actualmente Bolivia tiene un gobierno de transición después de la crisis política a fines de 2019 que resultó en la renuncia de Evo Morales.

El primer caso de COVID-19 en el país se detectó el 10 de marzo de 2020. Al 29 de abril existen 1053 casos de contagio confirmados (90.21 por millón), 55 muertes reportadas (4.71 por millón) y 5988 tests a nivel nacional (549 tests por millón). Para monitorear la crisis en el país, el IISEC inició la Serie Reflexiones sobre la pandemia en Bolivia con dos notas: “No 1: La importancia de testear” y “No 2: ¿Estamos ganando la pandemia?” (IISEC-2020).



Fuente: Elaboración IISEC-UCB con base en Ourworldindata.com.

Las medidas y acciones inmediatas para enfrentar la pandemia COVID-19

Las acciones inmediatas y las medidas económicas y sociales en el mediano plazo enfrentan el desafío de proteger a las poblaciones más vulnerables del país en una coyuntura de crisis económica de difícil previsión. La estimación de la Cepal (2020) para Bolivia es de un crecimiento negativo de -3% en 2020. Es importante recordar que la pandemia encontró al país en una situación macroeconómica en proceso de deterioro desde el fin de la bonanza económica en 2014: una continua desaceleración económica, el incremento de déficits gemelos (comercial y fiscal), la pérdida continua de reservas internacionales y la presión sobre el tipo de cambio fijo desde 2011.

La primera medida adoptada por el gobierno boliviano fue decretar tempranamente el distanciamiento social a partir del 18 de marzo: restricción en la circulación a partir de las 17:00, restricción de eventos/actividades sociales con un mínimo de 100 personas, jornada laboral excepcional (8:00-13:00) y suspensión de clases en todos los niveles educativos, suspensión de vuelos y cierre de fronteras. El 21 de marzo se declaró cuarentena total a nivel nacional y prohibición de la circulación de vehículos, y el 25 de marzo se restringió la circulación según la terminación del número de carnet de identidad, solo personas entre 18 y 65 años.

Pese a las dificultades de cumplimiento del confinamiento a cabalidad en todo el territorio nacional, debido principalmente a la alta informalidad laboral en el país y la necesidad de continuidad de las actividades económicas esenciales (ej. la distribución de alimentos y medicamentos, los servicios de salud, el recojo de basura, las fuerzas del orden u la administración pública, entre otros), esta fue una medida muy importante para desacelerar el contagio en el país. La dificultad institucional para adoptar protocolos de seguridad en la distribución de alimentos es un ejemplo de los problemas que enfrenta el país en esta coyuntura. El IISEC detectó este problema y, con base en sus investigaciones, publicó el primer número de la Serie Policy Brief “Acciones inmediatas para los actores del sistema agroalimentario en el altiplano paceño en el contexto de COVID-19” (IISEC-UCB, 2020).

Las medidas sociales más importantes se dieron a través de la ampliación de los bonos sociales y el pago de facturas de servicios básicos por el gobierno: el Bono Familia, correspondiente a todos los niños en todos los niveles (inicial, primaria y secundaria) en colegios fiscales y privados (US\$ 72 por hijo) y el Bono extraordinario (US\$ 72) para todas aquellas personas entre 18 años y 60 años que no reciben otros bonos y que no tienen un salario y el Bono a canasta familiar a las madres beneficiarias del bono Juana Azurduy y las personas con discapacidad de US\$ 57. A estas transferencias se determinó el pago de las facturas de energía eléctrica domiciliaria por el gobierno de forma progresiva según el nivel de consumo de los hogares, por los meses de abril, mayo y junio.

Entre las medidas laborales están el programa de apoyo al empleo y estabilidad laboral a través de la otorgación de créditos por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por mes, por un máximo de dos meses y créditos de carácter concesional, plazo de hasta 18 meses y con 6 meses de gracia y un plan de generación de trabajo de emergencia a través de inversión y gasto público en obras públicas.

Entre las medidas económicas están la eliminación de aranceles para importaciones de medicamentos e insumos médicos; controles y sanciones para evitar la especulación de precios;

suspensión de las cuotas de capital de créditos bancarios para personas naturales y jurídicas y facilidad al acceso de créditos de funcionamiento y operaciones para las empresas; retraso del abono del impuesto a las utilidades económicas (IUE) a través de un sistema de plazos; prohibición en la suspensión de servicios básicos por falta de pago mientras dure la crisis sanitaria y reducción temporal de pago de servicios básicos; ampliación de plazos para las empresas con obligaciones comerciales y registrales, y líneas de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa.

Para continuar el debate público sobre los desafíos socio-económicos estructurales y frente al COVID-19, el IISEC y la Fundación Jubileo iniciaron el Ciclo “Bolivia Debate: Un Futuro Sustentable” con cuatro paneles con expertos y representantes de diferentes sectores¹.

El déficit en el ejercicio de derechos de la población boliviana y los impactos de la Pandemia

La situación de déficit en el ejercicio de derechos antes de la pandemia nos permite aproximar las desiguales condiciones para enfrentar la crisis sanitaria en la actualidad e identificar tendencias en el contexto socio-económico de la crisis sanitaria. Con base en el Índice de la Deuda Social en América Latina (IDSAL) (Poy y Salvía, 2020), cinco dimensiones de derechos son analizadas por estratos socio-económicos: pobreza monetaria, calidad de hábitat, salud vital, acceso a educación, y calidad del trabajo. Se adiciona una dimensión transversal relacionada a la vida familiar, los cuidados y las relaciones de género.

Vida familiar, cuidados y relaciones de género

La familia es el espacio primordial de la humanización de las personas donde los seres humanos aprenden a cuidarse mutuamente. Como red social primaria la familia es esencial en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Las dinámicas familiares trascienden su espacio para influir en la sociedad en su conjunto. Las familias han variado entre las sociedades y a lo largo del tiempo. Su desarrollo está estrechamente relacionado con las transformaciones demográficas, sociales, económicas y políticas. Por esto ellas pueden verse afectadas negativamente por la pobreza, la baja calidad de la vivienda, la cultura de la violencia y carencia de acceso al trabajo decente. El feminicidio, la violencia intrafamiliar, el abandono y la pérdida de vínculo parental son algunos de los problemas que enfrentan las familias (IICC, 2017; IISEC, 2019).

La importancia de los cuidados en las familias, en la salud y en la sociedad está siendo dramáticamente expuesta en la crisis sanitaria actual. La medida de distanciamiento social pone de manifiesto cuales son las actividades más importantes para la sostenibilidad de la vida: el aseo, la compra y la preparación de alimentos, la atención de los niños, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. Trabajos que todavía no son correctamente valorizados social y económicamente. De igual manera la pandemia está visibilizando el valor de los trabajadores remunerados sin los cuales no podemos sobrevivir: el personal de salud, los productores y vendedores de alimentos y medicinas, los trabajadores de recojo de basura, entre otros.

El aislamiento social, el cierre de las escuelas y el aumento de las personas enfermas incrementan los trabajos no remunerados y de cuidado en las familias y, a su interior, la

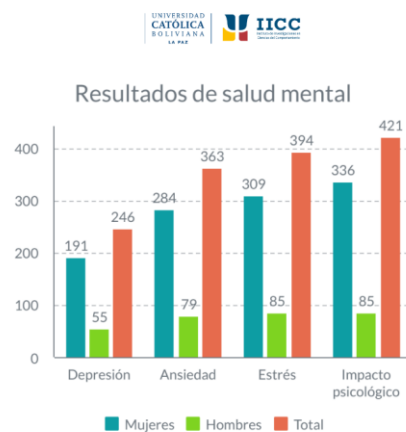
¹ Los paneles están disponibles en: <http://www.iisec.ucb.edu.bo/video-categoria/seminarios-y-conferencias>

sobrecarga del trabajo de las mujeres. Esta situación es mucho más grave en los hogares con hacinamiento y sin acceso a servicios básicos. La desigual distribución de los trabajos de cuidado es una dimensión central de la inequidad de género. Bolivia todavía no cuenta con encuestas de uso del tiempo y, por lo tanto, de indicadores sobre las jornadas completas de trabajo remunerado y no remunerado por sexo. Sin embargo, estudios cualitativos indican que las jornadas laborales de las mujeres son superiores a las de los hombres².



Aún más preocupante es la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia intra-familiar que, en la actual coyuntura, se encuentran confinadas con sus agresores. En el periodo de la cuarentena, hasta final de abril, se contaba con 1,872 denuncias por violencia familiar, 7 feminicidios y 60 casos de violaciones (Felcv). Más aún, una investigación llevada adelante por el IICC (2019), confirmó que, según la percepción de los adolescentes del país, el hogar es el espacio más peligroso para este grupo poblacional, comparado con la escuela y el barrio.

Otra importante dimensión de la Pandemia COVID-19 se refiere a los impactos psicológicos en la población. Un primer acercamiento fue realizado por el IICC (2020). Con base en 1532 encuestas (32,5% hombres y 67.5% mujeres) y una media de edad de 32,5 años, se observó que en general el 16% presentó depresión, el 24% ansiedad, el 26% estrés y el 27% impacto psicológico. Las mujeres evidenciaron mayor depresión (7,5pp.), ansiedad (12 pp.), estrés (13 pp.) e impacto psicológico (15pp.) más que los hombres. Los menores de 25 años presentaron cuatro veces más riesgo que los mayores de 46 años en las cuatro dimensiones. Así mismo, las personas entre 26 a 35 años tienen el triple de riesgo y las de 36 a 45 años tienen doble riesgo de presentar estos trastornos en relación a los mayores de 46 años. Las personas que residen en el área rural tienen el doble de riesgo de presentar impacto psicológico comparadas a las que viven en el área urbana. Las personas que viven en el área periurbana tienen 70% más riesgo de presentar ansiedad.



Los impactos psicológicos en relación a la división del trabajo no remunerado y de cuidados también fueron analizados. El estudio encontró que las personas que realizan más tareas en el hogar que antes de la cuarentena tienen mayor riesgo de presentar ansiedad y estrés en relación a las personas que realizan más labores durante la cuarentena. Las personas que tienen a su cargo familiares o personas que requieren cuidado tienen 80% mayor riesgo de presentar impacto psicológico y depresión. Las personas que reportaron que las tareas del hogar no eran compartidas por su pareja durante la cuarentena tienen el doble de riesgo de presentar impacto psicológico, depresión, ansiedad y estrés, comparadas con las que si compartían estas tareas. Se profundizará los impactos psicológicos en las siguientes dimensiones.

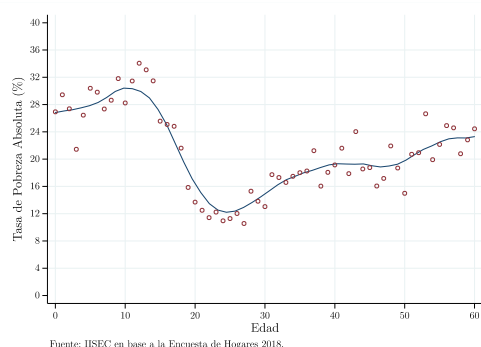
La pobreza antes de la pandemia

² Oxfam, 2019 y Ciudadanía, 2017 y Wanderley, 2019.

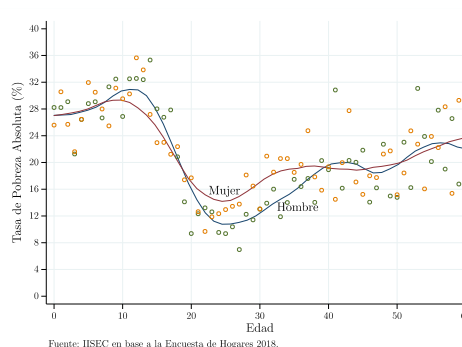
La pobreza es el indicador más directo de la deuda social en los países y expresa la insostenibilidad de vías de desarrollo que no se fundan en dinámicas de generación de riqueza respetuosas de los límites biofísicos del planeta y promotoras de bienestar social para toda la población. En América Latina los desafíos están en transformaciones de la estructura productiva con generación de empleo de calidad y ampliación de la protección social universal. Estos dos pilares se complementan para avanzar sociedades más prósperas, libres de pobreza, menos inequitativas y armónicas con su medio ambiente.

El 22% de la población boliviana se encontraba en situación de pobreza monetaria moderada (con umbral de USD PPA 5.50 per cápita por día) según el último dato disponible de 2018. La desigualdad rural y urbano permaneció significativa con 49.7% en situación de pobreza en el área rural y 9.9% en el área urbana. Los niños, niñas y adolescentes componen el grupo poblacional más vulnerable con los índices más altos de pobreza absoluta, mientras que las mujeres entre 20 y 40 años son las que sufren mayores niveles de privación económica en comparación con los hombres.

Tasa de pobreza por grupos etarios



Tasa de pobreza por grupos etarios y sexo



Desde una perspectiva temporal, el índice de pobreza monetaria redujo principalmente en el periodo de altos precios de las commodities (aproximadamente dentro 2008 y 2012). Esta reducción, sin embargo, estuvo relacionada principalmente al funcionamiento del mercado laboral (Wanderley y Vera, 2017). De acuerdo a cifras del Banco Mundial³, los ingresos laborales y la participación laboral en conjunto explican alrededor del 75% de la reducción en la pobreza moderada entre el periodo 2007 y 2017. En comparación, las transferencias (los bonos y rentas estatales) y la operación del sistema impositivo (todavía regresivo) tuvieron un efecto menor⁴ (5%). En los últimos años se observa la desaceleración de los avances que permitieron cerrar la brecha en relación al promedio Latinoamericano.

DIMENSIONES DE DERECHOS	INDICADOR	CUARTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO				TOT AL	ÁREA		SEXO	
		Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto		Rural	Urbana	M	H
Pobreza monetaria	Tasa de pobreza absoluta (USD PPA 5.50)	67.3	0.0	0.0	0.0	22.0	49.7	9.9	22.3	21.7

Fuente: Observatorio de la Deuda Social en Bolivia-UCB con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE.

³<https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/poverty/contribution-of-income>

⁴ El 20% de disminución restante es explicada por el pago de pensiones contributivas y jubilaciones, ingresos no laborales, y el bono demográfico (crecimiento de la población de 15 a 69 años de edad).

Considerando la proyección del crecimiento del PIB de -5,3% para América Latina y El Caribe y de -3% para Bolivia en 2020 (Cepal, 2020), se anticipa el deterioro de los indicadores sociales. Para América Latina, la Cepal proyecta un incremento de 4,4 puntos porcentuales de la pobreza moderada y de 2,5 puntos porcentuales de la pobreza extrema.



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PAZ IICC

Hábitat Digno

El hábitat es el espacio socialmente estructurado en el cual tiene lugar la reproducción biológica y social de los individuos, las familias y las comunidades. En su configuración intervienen factores sociopolíticos, económicos y culturales. La mercantilización del espacio urbano suele traducirse en desigualdades de acceso a un hábitat adecuado; ello tiene consecuencias especialmente en sectores sociales vulnerables.

En el contexto de confinamiento en los hogares, las condiciones de hábitat no solo son centrales para la calidad de vida, como también condiciona la capacidad de las familias para obedecer la medida de distanciamiento social. En Bolivia 23.1% de las personas residían en hogares con hacinamiento, 33.4% en hogares sin agua potable al interior de la vivienda o lote y 53.7% sin acceso a red de alcantarillado en 2018. El déficit en calidad de la vivienda en el área rural permanece significativamente más alto que el área urbana. El 94.9% de los hogares rurales no disponían de red de alcantarillado, el 78.1% no tenían agua potable y el 19.6% de energía eléctrica en 2018. El déficit de hacinamiento y de acceso a agua potable en los hogares más pobres era más del triple en relación a los hogares en el estrato medio alto.

DIMENSIONES DE DERECHOS	INDICADOR	CUARTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO				TOT AL	ÁREA	
		Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto		Rural	Urbana
Hábitat Digno (% de la población)	Hacinamiento (Residir en hogares con 5 o más personas por dormitorio)	36.6	22.7	13.6	10.9	23.1	33.8	18.4
	No Disponer de agua potable al interior de la vivienda o lote	56.6	28.1	20.5	15.4	33.4	78.1	13.9
	No Disponer de red de alcantarillado	75.6	53.9	40.0	30.2	53.7	94.9	35.6
	No Disponer de energía eléctrica	13.0	3.5	2.9	2.3	6.3	19.6	0.4

Fuente: Observatorio de la Deuda Social en Bolivia-UCB con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE

En relación a los impactos psicológicos, el estudio del IICC (2020) encontró que *las personas que viven en condiciones de hacinamiento* tienen un 70% más riesgo de presentar ansiedad que las personas no hacinadas. Las personas que viven en alquiler sin contrato tienen 80% más riesgo de presentar impacto psicológico, depresión y ansiedad, comparadas a las que cuentan con vivienda propia y sin hipoteca.

Salud vital

Esta dimensión se refiere a la integridad personal, el acceso a una alimentación suficiente y a un estado satisfactorio de salud. Las personas que viven en pobreza están frecuentemente afectadas por la falta de alimentos suficientes, una exposición al riesgo de enfermedades y a condiciones de vida precarias. De igual manera depende del acceso a la salud como un bien

público. Esta dimensión da cuenta del acceso a derechos habilitantes, en tanto les permiten a los individuos no sólo disfrutar de mejores condiciones de vida sino también de otros derechos sociales, económicos y culturales.

Los indicadores de mortalidad infantil y desnutrición han mejorado en las últimas décadas pasando de 75.3 muertes por mil menores de 5 años en 2000 a 26.8 muertes en 2018 (Datos Banco Mundial)⁵. Sin embargo, la prevalencia de desnutrición moderada y severa sigue afectando al 16.37% del total de la población en 2018, alcanzando 22.95% de las personas que viven en el área rural y 13.49% en el área urbana (EH, INE). Esta diferencia está relacionada con la urbanización continua y un mayor acceso a alimentos de bajo costo, aunque ha incrementado la incidencia de enfermedades y condiciones relacionadas a hábitos alimenticios poco saludables. Como muestra de ello, según estimaciones de la OMS⁶, en Bolivia ha existido un acelerado incremento en las muertes ocasionadas por la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. No menos importante es notar que la inseguridad alimentaria presenta una relación directa y positiva con el estrato socio-económico, afectando a 25.54% de las personas en el muy bajo y 5.57% en el medio alto en 2018. (IISEC-UCB, 2019 a y b)

DIMENSIONES DE DERECHOS	INDICADOR	CUARTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO				TOTAL	ÁREA	
		Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto		Rural	Urbana
Salud Vital	Inseguridad alimentaria (moderada-severa)	25.54	16.99	10.87	5.57	16.37	22.95	13.49
	Inseguridad alimentaria (severa)	4.19	3.31	1.70	0.96	2.81	3.28	2.60

Fuente: Observatorio de la Deuda Social en Bolivia-UCB con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE.

Bolivia, como otros países latinoamericanos, avanzó un sistema público de salud. Desde una visión de largo plazo, los diferentes gobiernos implementaron políticas orientadas a la universalidad del sistema de salud. Primero se priorizó la cobertura de servicios de salud para la niñez y los adultos mayores. El año 2003 comenzó a operar el Seguro Materno Infantil (SUMI), que cubría la atención médica de madres y niños hasta los 5 años de edad. El año 2006 se agregó el SPAM, dirigido a la población mayor a 60 años de edad. Estos programas permitieron canalizar los nuevos recursos municipales provenientes del IDH a la inversión en

salud, la cual había sido relegada hasta entonces. Sin embargo, la mayoría de la población siguió sin acceso a servicios de salud. Esto llevó a la aprobación de la Ley del Sistema Único de Salud en 2019, el cual buscó expandir el servicio a toda la población sobre la base institucional de los dos programas mencionados. La implementación de este nuevo sistema, sin embargo, no se sustentó con el incremento de presupuesto y dejó en evidencia falencias a distintos niveles. Carencias de personal, equipos, insumos, entre otros retos todavía no fueron superados. Antes de la pandemia, la presidenta de Bolivia anunció el incremento de 10% del PIB la inversión pública para el sector de salud.

En relación a los impactos psicológicos, el estudio del IICC (2020) encontró que las personas que sufren de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y artículos de higiene en mediano, bastante y mayor grado, tienen alrededor del doble de riesgo de presentar impacto psicológico, depresión, ansiedad y estrés, comparadas con las que sufren poco desabastecimiento.

⁵ Revisión 4 de mayo de 2020. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT?locations=BO>

⁶ https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_Global_2000_2016.xls?ua=1

En síntesis, las deficiencias del sistema de salud fueron dramáticamente expuestas en la crisis sanitaria actual, aunque eran evidentes antes de la pandemia: baja cobertura, rezago en la respuesta a los cambios epidemiológicos y fragmentación en cajas corporativas por sectores de trabajadores. En el mediano y largo plazo, los países con reducidos espacios fiscales, como es el caso de Bolivia, se encuentran con probables retrocesos en los avances de los indicadores de salud si no se prioriza una inversión significativa para el fortalecimiento del sistema público de salud.

Educación

El acceso a la educación puede ser visto desde dos perspectivas. En primer lugar, en términos de desarrollo humano, constituye una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de una vida creativa. En segundo lugar, la educación permite la realización de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la salud y/o a la participación política en sociedades democráticas. En este sentido, es un vehículo de movilidad social y un canal de integración social.

La inversión en educación en Bolivia desde los años noventa fue significativa y resultó en el progreso importante en la matrícula escolar, principalmente en el nivel primario (6 a 11 años) llegando a 99%. Actualmente los déficits de matrícula están concentrados en la educación inicial y la educación secundaria: 44.3% de los niños entre 4 y 5 años no asisten al nivel inicial y 11% de los adolescentes (12 y 18 años) no asisten al nivel secundario. Todavía no se cerró la brecha entre el área rural y urbana principalmente en el nivel secundario. También persiste la brecha entre mujeres y hombres en el nivel inicial y secundario.

DIMENSIONES DE DERECHOS	INDICADOR	CUARTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO				TOT AL	ÁREA		SEXO	
		Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto		Rural	Urbana	M	H
Educación	Déficit de matrícula escolar inicial (4 a 5 años)	48.3	45.3	37.1	36.5	44.3	52.3	40.4	45.2	44.3
	Déficit de matrícula escolar primaria (6 a 11 años)	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1	1.2
	Déficit de matrícula secundaria (12 a 18 años)	10.1	11.4	10.8	14.1	11.0	13.9	9.6	13.1	9.2
	Déficit de matrícula sobre-edad (5-15 años)	18.2	16.9	17.0	16.5	39.7	17.6	17.4	16.7	18.2

Fuente: Observatorio de la Deuda Social en Bolivia-UCB con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE.

Una preocupación central se refiere a la calidad de la educación, dado que Bolivia actualmente no forma parte de ninguna de las iniciativas de medición de calidad de la educación en la región. El único dato viene del Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) del año 1997, cuando entre 13 países Bolivia ocupó el puesto 11 en términos de lenguaje y noveno en matemáticas, de acuerdo a los puntajes no ajustados (LLECE, 1998). También surgen cuestionamientos si mayor asistencia escolar está acompañada de mayor progreso educativo para todos.

La crisis sanitaria del COVID-19 puso de manifiesto la brecha digital y, en específico, la inequidad en el acceso a computador e internet entre los estudiantes especialmente en la educación universitaria, sin mencionar que todavía no se cerró la brecha de acceso a

electricidad en los hogares del país. Este es un elemento importante de la inequidad educativa en el siglo XXI.

Trabajo decente y protección social

El trabajo constituye un vector fundamental de la integración social pues permite acceder a recursos económicos, ofrece un ámbito de realización personal y favorece la construcción de la identidad personal. No obstante, en sociedades periféricas, el mundo del trabajo se presenta fragmentado y heterogéneo. Esta dimensión evalúa el acceso a un empleo decente, en condiciones de protección social y la prevalencia de formas de empleo ligadas a la subsistencia que no garantizan la reproducción material del trabajador y su familia.

Antes de la pandemia y principalmente en el periodo del boom económico (2005-2014), el incremento de los ingresos laborales se concentró en los trabajadores con menos calificación y ocupaciones precarias. Esto ha contribuido significativamente para la disminución de la pobreza y la desigualdad monetaria. Sin embargo, Bolivia sigue con un déficit significativo en relación a la calidad del trabajo. Como muestra de ello, se observa que 66.8% de los trabajadores no estaban afiliados a un seguro de salud y 83.2% no aportaban a una pensión contributiva en 2018. La alta tasa de informalidad en Bolivia, cercana al 83% de la población ocupada en 2014 (OIT, 2018) es un problema estructural que no fue superado en el periodo de bonanza económica. Estos trabajadores son los más vulnerables a la crisis sanitaria y la contracción económica.

DIMENSIONES DE DERECHOS	INDICADOR	CUARTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO				TOT AL	ÁREA		SEXO	
		Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto		Rural	Urbana	M	H
Trabajo y protección social	Déficit de ocupados con aportes a una pensión contributiva (AFP)	98.0	89.4	79.5	62.8	83.2	94.4	77.1	84.2	82.4
	Déficit de ocupados con afiliación a un seguro de salud	73.7	66.7	57.3	45.1	66.8	70.0	59.9	61.7	64.4
	Déficit de cobertura pensiones contributivas y no contributivas (Adultos más 60 años)	5.3	4.2	5.9	11.5	6.9	5.8	7.7	6.0	7.9

Fuente: Observatorio de la Deuda Social en Bolivia-UCB con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE.

Las mujeres en situación de pobreza, ocupadas en trabajos informales y por cuenta propia, muchas de ellas jefas solas de familia componen uno de los grupos con mayor vulnerabilidad en la crisis provocada por el COVID-19. Se sabe que el 82% de las familias monoparentales con hijos tiene jefatura femenina en Bolivia (IISEC, 2019). En Bolivia, 1.881.231 mujeres generan sus propias fuentes de trabajo, correspondiendo alrededor el 71.42% del total de la población ocupada femenina a fines de 2019 (Encuesta de Empleo-INE). Si a ellas sumamos a las trabajadoras del hogar (4%) llegamos alrededor de 75% del total de las mujeres ocupadas en trabajos remunerados. En el caso de los hombres, 62.86% del total de la PO masculina generan sus propias fuentes de ingreso como trabajadores por cuenta propia, empleadores con remuneración, trabajadores familiares sin remuneración y cooperativistas a nivel nacional correspondiendo a 1.973.064. Al agregar a los trabajadores asalariados sin contrato laboral formal y al margen de la regulación laboral y la seguridad social, tenemos a un universo mayoritario de trabajadores en situación de informalidad.

Otros datos indican el peso preponderante del trabajo generado por micro y pequeña empresas, y el impacto de la crisis sanitaria sobre las fuentes laborales en el país. El 68% de la población estaba ocupada en unidades con 4 o menos trabajadores. Según sector de actividad, el 57.83% estaba ocupada en el sector familiar, 11.51% en semi-empresarial, 11.51% empresarial, 10.26% en estatal y 1.97% doméstico remunerado en 2018 (EH-INE).

La Cepal (2020) estima un aumento del desempleo en 3,4 puntos porcentuales en América Latina, el cual resultaría en el retroceso no solo de la pobreza, como de la desigualdad monetaria medida por el coeficiente de Gini entre un 1% y un 2%. Siendo esta una aproximación preliminar que no considera el efecto de la caída en los ingresos laborales en los hogares de menores recursos.

En relación a los impactos psicológicos, el estudio del IICC (2020) encontró que las personas con empleo informal tienen 40% más riesgo de presentar impacto psicológico en relación con las que tienen trabajo fijo. Las personas que no son económicamente activas (trabajo en el hogar no remunerado o desempleo) tienen un 80% más riesgo de presentar depresión comparado con las que tienen trabajo fijo. Las personas cuya actividad económica y su salario se suspendieron, tienen 40% más riesgo de presentar impacto psicológico y depresión comparadas con las personas que continúan su actividad mediante teletrabajo y cuentan con salario. Las personas que siguen asistiendo a su trabajo tienen un 80% más riesgo de presentar depresión y las personas que fueron despedidas momentánea o definitivamente, tienen alrededor del doble de riesgo de presentar impacto psicológico, depresión y estrés.

La introducción de una pensión universal no contributiva desde los años noventa y el incremento del monto en los siguientes años han favorecido la reducción de la vulnerabilidad de los adultos mayores a 60 años. Sin embargo, el monto que esta comprende es insuficiente para cubrir necesidades básicas. El monto actual de \$us 50 representa menos de 65% de lo considerado necesario. La expansión de los bonos para enfrentar la crisis sanitaria es importante para aminorar las dificultades que enfrenta la mayoría de la población en la coyuntura actual. En el mediano y largo plazo Bolivia enfrenta un complejo desafío de financiamiento de la seguridad social para garantizar una vida digna para todos los ciudadanos.

Consideraciones finales

Es posible indicar los impactos económicos y sociales de la crisis sanitaria, aunque es difícil estimar los mismos con exactitud debido a que estos dependen del tiempo del distanciamiento social, de la paralización de las actividades económicas y del peso de los bienes y servicios vinculados al mercado externo de cada economía. Sin embargo, los ejercicios de aproximación son importantes para la elaboración de estrategias asertivas, primero en el proceso de contención del contagio y, posteriormente en la reactivación económica y la protección social a la población más vulnerable.

La crisis sanitaria de la pandemia y el cierre de las actividades económicas agudizan la situación de vulnerabilidad de las familias de los estratos sociales más bajos. En específico aquellas que no ejercen las cinco dimensiones de derechos: pobreza monetaria, calidad de hábitat, salud vital, acceso a educación, y calidad del trabajo.

Esta crisis inesperada para la mayoría y dramática más para unos que para otros, pero universal en el sentido más preciso de esta palabra, nos abre la oportunidad de aprender importantes

lecciones: Si todos los habitantes de un país, de una región y del planeta no están sanos y no tienen una vida digna, todos estamos en riesgo. La salud y las condiciones de vida digna son un bien común y, como derechos humanos, deben ser garantizados por los Estados. La erradicación de la pobreza a través de la distribución justa de la riqueza es central para la sostenibilidad de la vida y de la economía.

En síntesis, la vida humana es lo más importante y es vulnerable; y cuando se encuentra en riesgo la economía se detiene, el mundo se paraliza. Finalmente, en la retomada del crecimiento, será central priorizar la inversión pública para fortalecer el sistema de protección universal y, específicamente, del sistema público de salud y promover los sectores económicos generadores de trabajo y en el marco del equilibrio de los ecosistemas.

Referencias

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Política (2017). Memoria Seminario Nacional de Cuidados. Cochabamba, Ciudadanía.

<https://www.ciudadaniabolivia.org/es/node/756>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020). Segundo Informe Especial - Dimensionar los efectos de la COVID-19 para pensar en la reactivación económica. Santiago de Chile, CEPAL.

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion>

Instituto de investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC - UCB) & Aldeas Infantiles SOS (2017). Cada niño y cada niña cuenta: Situación de derechos de niños y niñas que perdieron el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. La Paz, IICC-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/cada-nino-y-nina-cuenta-situacion-de-derechos-de-los-ninos-y-ninas-que-perdieron-el-cuidado-familiar-o-estan-en-riesgo-de-perderlo>

Instituto de investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC –UCB) & World Vision Bolivia. No le digan a nadie lo que les conté: Violencia contra la niñez y adolescencia, una mirada desde los niños, niñas y adolescentes.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/infoiicc-no-2-no-le-digan-a-nadie-lo-que-les-conte>

Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC – UCB) (2020). Efectos psicológicos y sociales de la cuarentena en Bolivia. Manuscrito no publicado.

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB) (2019a). InfoIISEC N. 1 Familias en Transición. Cambios en las familias bolivianas entre 2002 y 2017. La Paz: IISEC-UCB.

www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/infoiisec-no-1

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB) (2019b). InfoIISEC No 2. Cambios socio-demográficos en Bolivia. La Paz: IISEC-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/infoiisec-no-2>

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB) (2019c). InfoIISEC No 3 Migración regiente en Bolivia. La Paz: IISEC-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/infoiisec-no-3-migracion-reciente-en-bolivia>

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISec-UCB) (2020a). Policy Brief N.1. Acciones inmediatas para los actores del sistema agroalimentario en el altiplano paceño – situación de emergencia sanitaria frente al COVID-19. La Paz, IISec-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia>

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISec-UCB) (2020b). Serie Reflexiones sobre la pandemia N.1. La importancia de los tests. La Paz: IISec-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia>

Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISec-UCB) (2020c). Serie Reflexiones sobre la pandemia N.2. Coronavirus en Bolivia. ¿Estamos ganando la pandemia?. La Paz: IISec-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia>

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018) *Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico*. Ginebra, Suiza.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf

Oxfam (2019). Tiempo para cuidar. Compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida. Informe de Investigación. La Paz, Oxfam

https://actions.oxfam.org/media/assets/file/Tiempo_para_cuidar.pdf

Poy, S. y Salvía, A. (2020). Índice sobre las Deudas Sociales en América Latina. Red Observatorios de la Deuda Social en América Latina.

http://www.iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion_observatorio/INFORME_IDSAL_AMP_LIADO_14_PAISES.pdf

Wanderley, F. y Vera, Horacio (2017). Las Dinámicas del Mercado de Trabajo en Bolivia. Documento de Trabajo IISec-UCB No 01/17. La Paz: IISec-UCB.

<http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/publicacion/las-dinamicas-del-mercado-de-trabajo-en-bolivia-2005-2015>

Wanderley, F. (2019). Las Políticas de Cuidado en América Latina – Articulando los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades-. Documento de Trabajo IISec-UCB No 2/2019.